

Solidaridad

GLOBAL

> **GOLPE EN HONDURAS**
Caos político en un país dividido por la desigualdad

> **ENTREVISTA** al
exdelegado del Frente
Polisario en Aragón

> **LOS SIN TIERRA**, la
lucha por la dignidad del
campesinado en Brasil

Multinacionales y derechos humanos

Edita:



asociación paz y solidaridad
aragón

CCOO



comisiones obreras de Aragón

Subvenciona:



GOBIERNO
DE ARAGON

EDITA

Paz y Solidaridad
Comisiones Obreras

CONSEJO EDITORIAL

Juan Colom
Javier Lázaro
Eva Murillo
Margarita Lasmarías
Óscar Forradellas
Elisa Cardiel
Javier Martín

MAQUETACIÓN Y DISEÑO

Gabesa

DEPÓSITO LEGAL

Z-2305-09



06 Actualidad

Millones de trabajadores claman por una salida digna de la crisis // Honduras, un pueblo dividido por el golpe de Estado // Golpe mortal a la Justicia Universal / 6-11



12 Aragón Solidario

Abbas: «Nuestro objetivo es la libertad del Sáhara» // El Comité de Solidaridad Internacionalista // Acción Solidaria Aragonesa / 12-19



20 Cooperación a fondo

Multinacionales y Derechos Humanos, por Javier Lázaro // Los Sin Tierra de Brasil, por Juan Carlos Burillo / 20-29



30 Sindicalismo y solidaridad

El Barrio Solidaridad, una apuesta por una vivienda saludable / 30-33



34 Desarrollo Global

Ricardo Álvarez: «Las leyes económicas mundiales son la ley del embudo» / 34-37



38 Te interesa

«El agua derecho humano raíz de conflicto» // Convenio sindical en el Mediterráneo // El codesarrollo / 38

Saludas

La iniciativa de poner en marcha una revista de información, reflexión y debate sobre temas internacionales siempre es una buena noticia.

GLOBAL ha llegado en un momento especialmente oportuno. La crisis económica y sus consecuencias para el empleo y las condiciones de vida de cientos de millones de personas exigen tanto una acción global concertada de los gobiernos y los agentes sociales para la recuperación económica como un cambio de modelo de desarrollo hacia un modelo económica y medioambientalmente sostenible y socialmente justo. Esta es al menos la visión y la voluntad del sindicalismo democrático y de clase. La cooperación internacional deberá seguir teniendo un papel muy importante en la superación de la crisis y el cambio de modelo, pero hay que subrayar lo inaplazable que resulta una nueva política económica –y social- global que se enfrente a los grandes desafíos de la pobreza y la malnutrición, el aumento de las desigualdades sociales, el cambio climático, el desempleo y la precariedad laboral, la falta de respeto a las normas fundamentales del trabajo y los demás principios del trabajo decente, etc. La cooperación tendría que pasar a ser el complemento de políticas justas aplicadas por gobiernos honestos y no sustituir a la ausencia de ambos.

Por eso hay que alegrarse cuando nace una plataforma de debate que pueda abordar, entre otras cosas, las relaciones entre la cooperación internacional al desarrollo y las nuevas políticas globales que se están construyendo, con todo tipo de contradicciones eso sí, y el papel que agentes sociales, movimientos sociales y ONG pueden jugar para influir en su definición y puesta en práctica.

En Comisiones Obreras llevamos muchos años trabajando en el campo de la solidaridad y la cooperación internacional, con proyectos en diferentes áreas geográficas y orientados a diferentes colectivos. Desde hace un tiempo nuestra prioridad es lógicamente la cooperación para fortalecer el sindicalismo y sus organizaciones nacionales, regionales y sectoriales (en América Latina, África y la Región Mediterránea). Nos parece obvio que una condición esencial para que una sociedad sea democrática y prospere económica y socialmente es que haya sindicatos fuertes, democráticos y comprometidos en la defensa de los intereses generales, no sólo en cada nación, sino también en sus regiones y a nivel mundial. Así contribuimos a construir el nuevo internacionalismo sindical que la Confederación Sindical Internacional insertó como lema programático desde su fundación en 2006

Javier Doz

Secretario de Internacional CS de CC OO

Editorial

Podría pensarse que este número de la revista Solidaridad Global ve la luz en un momento muy intenso y delicado en diferentes puntos del planeta. Pero si revisamos las hemerotecas, veremos que no difiere apenas de otros momentos igual de preocupantes vividos este mismo año o en años anteriores.

Repasamos temas que están de plena actualidad en la realidad mundial: a la situación que se está viviendo en Latinoamérica, con el ilegal proceso electoral vivido en Honduras tras el golpe de estado del pasado mes de junio, se le suma la dramática realidad de la población saharauí que vuelve a poner en primer plano un proceso histórico en el que nuestro país, los sucesivos gobiernos, han desempeñado un papel absolutamente lamentable.

Hacemos también repaso de la actividad de ASA, organización histórica en nuestra tierra, así como de la situación del Movimiento de los Sin Tierra en Brasil. Contamos el trabajo que nuestra Fundación Paz y Solidaridad hace en el Barrio Solidaridad, en Nicaragua, y acabamos con una entrevista al responsable de la recién estrenada Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza

Hemos querido dedicar la parte central de esta revista a analizar la situación que está creando la presencia de grandes multinacionales en países emergentes. Lejos de adoptar las disposiciones marcadas por la legislación internacional, de respetar los acuerdos tomados al amparo de la Organización Internacional del Trabajo y de la ONU, estas empresas se desmarcan de las leyes establecidas buscando un incremento desmesurado de sus beneficios a costa de unas condiciones de trabajo indignas, de unos costes salariales vergonzantes y de una sobreexplotación de los recursos naturales de estos países que van a hipotecar cualquier posibilidad de desarrollo futuro y la capacidad de independizarse económicamente.

En Aragón sabemos mucho de los temores e incertidumbres que conlleva la instalación de una multinacional en un territorio en desarrollo. Y sabemos mucho de lo que supone defender los derechos de trabajadoras y trabajadores. Nuestra experiencia y nuestro compromiso tiene que servir para que en otros países se respeten todos los derechos de la ciudadanía, empezando por el más básico, el derecho a la vida.

Denunciamos aquí que empresas españolas estén llevando a cabo actuaciones que limitan estos derechos, estén dando cobertura a represiones de la libertad sindical. Estas empresas, que en nuestro país cumplen con la legalidad, deben comprometerse con el desarrollo de los derechos humanos en los países donde se instalan y con la mejora global de las condiciones de vida de sus trabajadores y trabajadoras.

Esperamos que, como decíamos en nuestro primer número, esta revista sirva para hacer llegar a cada vez más gente el conocimiento de la realidad en otras partes del mundo, su sensibilización y su implicación. Nunca renunciaremos a, entre todas y todos, avanzar en la consecución de un mundo realmente solidario, donde lo que se globalice sea la justicia y el derecho a vivir con dignidad.



Millones de trabajadores claman por una salida digna de la crisis

Redacción



El pasado 7 de octubre se celebró la II Jornada Mundial por el Trabajo Decente convocada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) bajo el lema "Haced que el mundo trabaje" (Get the world to work) y secundada por millones de personas en los cinco continentes. Al igual que en la edición anterior, los eventos se desarrollaron en lugares de todo el mundo, con actos multitudinarios en grandes capitales y concentraciones reivindicativas en pequeñas poblaciones. En total participaron 109 países desde el Pacífico oriental hasta la costa Oeste de los Estados Unidos que organizaron 421 actividades de todo tipo: manifestaciones, seminarios, encuentros deportivos, etc.

En la mayoría de los casos, las acciones abarcaron no sólo en el lema principal, sino también cuestiones de carácter nacional. Por ejemplo, en España los delegados de CCOO reclamaron a la Administración la defensa del empleo y la protección social como vías para salir de la crisis y pidieron a la patronal el desbloqueo de la negociación colectiva, atascada por el incumplimiento de la actualización de los salarios al IPC previsto.

En África se celebraron 107 acciones en 40 países distintos, con predominancia de actos centrados en los derechos humanos de los trabaja-

dores. Por ejemplo, en Sudáfrica las afiliadas de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Sudafricanos organizaron piquetes a la hora del almuerzo en los centros de trabajo. Además, la Federación de Sindicatos sudafricanos (FEDUSA) organizó dos conferencias de prensa en Johannesburgo y Ciudad del Cabo.

En el continente americano las actividades proliferaron tanto en el Norte como en el Sur. En Estados Unidos, la AFL-CIO organizó una gira por el trabajo decente en la que se registraron las opiniones de trabajadores de distintos condados. Hicieron coincidir la presentación de estas demandas con el G20 en Pittsburgh, acaparando así una gran atención mediática. Posteriormente, los líderes del sindicato estadounidense prosiguieron realizando actos públicos y consultas dirigidas a distintas fracciones de la sociedad.

Por una edad mínima laboral

En Canadá, las intervenciones de los dirigentes sindicales en diversos actos públicos se centraron en la promoción de una ley de edad mínima laboral a nivel nacional. El sindicato Canadian Labour Congress, con la ayuda de la Federación de Jóvenes Trabajadores, entregó sendas decla-

raciones en cada una de las delegaciones provinciales y territoriales del gobierno, manifestando la necesidad de ratificar el Convenio 138 de la OIT y la necesidad de leyes sobre la edad mínima en todo el país.

En América Latina, las movilizaciones en toda la región tuvieron su epicentro en Buenos Aires, donde tuvo lugar la XVI Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT-OEA). La Confederación Sindical de las Américas (CSA), conjuntamente con sus afiliadas la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), realizaron un acto público en el que participaron cinco mil personas.

Por otra parte, Colombia se celebró una marcha unitaria en Bogotá para terminar en la Plaza de Bolívar con intervenciones de las Centrales Obreras afiliadas a la CSA: la CGT, la CTC y la CUT, Organizaciones Políticas consecuentes y Organizaciones Sociales.

Las centrales brasileñas CUT, Força Sindical y UGT llevarón a cabo una movilización en las calles de Brasilia para presionar a los diputados y senadores a aprobar la propuesta de enmienda constitucional para recortar la jornada de trabajo sin reducción de salarios y gravar un 75% las horas adicionales sobre las ordinarias.

En la región Asia-Pacífico destacan los *workshops* o talleres informativos para trabajadores centrados en torno al tema del sida en el lugar de trabajo o cuestiones de formación sindical. En Tokio, RENGO congregó el día 16 de octubre a 2.500 participantes que clamaron en una marcha de tres kilómetros por el centro de la ciudad por un trabajo y una vida decentes. Y, en Indonesia, el sindicato KSBSI realizó varias acciones divulgativas con la edición de un folleto sobre el trabajo decente, la celebración de un seminario el 6 de octubre y una manifestación el 7 de octubre.

Movilización masiva

En Europa, la participación fue muy nutrida, cubriendo todos los Estados europeos (incluidos algunos no miembros de la Unión Europea: Federación Rusa -con más de un millar de actos, según los sindicatos del país-, Ucrania, Albania, Bosnia Herzegovina, Georgia), con todo tipo de actividades, desde la creatividad británica de organizar un evento cultural nocturno en torno al trabajo decente, con la presencia de conocidos escritores y músicos, hasta acciones más tradicionales como la publicación de noticias en periódicos nacionales, o concentraciones en lugares emblemáticos.

Berlín albergó el acto central, coincidiendo con la reunión en la capital alemana del V Consejo General de la Confederación Sindical Internacional (CSI). La DGB ofreció una confe-



rencia de prensa tras la que tuvo lugar una manifestación en la Puerta de Brandemburgo. En Roma, más de 500 representantes sindicales discutieron la necesidad de garantizar los derechos a los trabajadores inmigrantes llegados a Italia.

El sindicato británico TUC puso la nota de color en Londres con una noche festiva con música, comedia y discursos de sindicalistas y escritores. Finalmente, las centrales croatas UATUC y NHS prepararon un bombardeo de tarjetas postales enviadas al Gobierno, ministros, parlamentarios y empresarios, mostrando grandes manifestaciones y las reivindicaciones de los sindicatos.

Las acciones en España supusieron una proporción amplia de los eventos en la región europea, lo que mereció la felicitación de la directora de campañas de la CSI, Kristin Blom, y de la presidenta de la CSI, Sharan Burrow, durante la reunión del Consejo General, que se celebró en Berlín. En Aragón, se realizó una concentración conjunta en Zaragoza, frente a la Delegación de Gobierno, de 650 delegados con intervención de los secretarios generales. En Huesca y Teruel se realizaron sendas concentraciones y se hizo entrega de firmas a la Subdelegación del Gobierno en ambas ciudades.

Los sindicatos
brasileños
pidieron recortar
la jornada laboral
sin reducir
los salarios



Honduras, un pueblo dividido por el golpe de Estado

Redacción

En estos últimos cinco meses Honduras ha sufrido una de las crisis políticas más fuertes que se han vivido en el país y en Centroamérica en la última década. El presidente Manuel Zelaya quiso realizar una consulta al pueblo hondureño para saber si tenía su apoyo para un tercer mandato tras acercarse unos nuevos comicios. La reacción a la propuesta de referéndum del presidente terminó con un golpe de Estado y el exilio de éste a Costa Rica. Durante los meses siguientes, el país hondureño ha sufrido una crisis que ha dividido al país en dos, se han suprimido muchos de los derechos fundamentales y recientemente se han celebrado unas elecciones que distan mucho de resolver el conflicto interno del país. Los antecedentes al golpe de Estado los encontramos en los meses previos al 28 de junio de este mismo año. En Honduras se estaba viviendo una crisis política en la cual se enfrentaron el presidente Manuel Zelaya con el Congreso Nacional y la Corte Suprema. El tema de confrontación era la legalidad de la llamada "cuarta urna" para votar en referéndum y cambiar la Constitución. Zelaya quería saber si los ciudadanos estarían de acuerdo en que pudiera ejercer la presidencia en un tercer mandato si volvía a presentarse en las elecciones del 2013. Los opositores al presidente afirmaron que buscaba perpetuarse en el poder, aunque Zelaya lo negó. Todos estos hechos desembocaron en el golpe que supuso la destitución del presidente constitucional y el nombramiento de Roberto Micheletti como mandatario interino de Honduras.

De hecho, efectivos de las fuerzas armadas irrumpieron en la Casa Presidencial y obligaron a Zelaya a tomar un avión por la fuerza y trasladarse a Costa Rica. La comunidad internacional no tardó en considerarlo un golpe de Estado contra el presidente constitucional, por lo que el nuevo Gobierno no fue reconocido por ningún país o entidad internacional. Organismos como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea exigieron unánimemente la restitución del ex-presidente Manuel Zelaya en sus funciones.

En las semanas posteriores al 28 de junio, el Congreso decretó un estado de sitio, suspendiendo garantías de los ciudadanos contenidas en ocho artículos de la Constitución: la libertad personal, la libertad de asociación y reunión o el derecho a circular libremente fueron restringidos por el Gobierno de facto.

Hubo movilizaciones en apoyo de ambos sectores, una de las cuales desembocó en el asesinato de un manifestante opositor al golpe; la OEA suspendió a Honduras como miembro de la organización hasta que el país no restaurara el Gobierno de Manuel Zelaya; el Salvador, Nicaragua, Guatemala, Venezuela y los Estados Unidos anunciaron sanciones económicas para Honduras a causa del "golpe de Estado"; el Banco Internacional de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial anunciaron la suspensión de la ayuda financiera que otorgaban a Honduras y se produjo una retirada en bloque de todos los em-

bajadores de la Unión Europea en Honduras. La vulneración de los derechos humanos se constata en otros hechos como los centenares de detenciones que se han realizado en estos meses, un importante número de ejecuciones extrajudiciales o la supresión de la libertad de expresión e información.

En Honduras, los jueces, el congreso, las fuerzas militares, la iglesia católica y los empresarios mostraron su apoyo al gobierno de Micheletti. En el mes de agosto, la Corte Suprema de Justicia local emitió su posición al declarar que los sucesos del 28 de junio constituyen una «sucesión constitucional».

En sus primeras declaraciones como presidente interino de Honduras, Micheletti negó haber alcanzado dicho cargo “bajo la ignominia de un golpe de Estado”, calificando de “proceso de transición absolutamente legal” el proceso por el cual alcanzó la presidencia. También anunció que mantendría la convocatoria a elecciones para el 29 de noviembre del 2009.

La población en estos cinco meses de incertidumbre se ha dividido en dos facciones: a favor del Gobierno del depuesto presidente Zelaya y en contra de la vuelta de éste. Las acciones de protesta se sucedieron en ambos bandos. Los simpatizantes de Zelaya anunciaron una huelga general y realizaron manifestaciones de protesta en Tegucigalpa y una concentración con más de 500.000 personas en el Aeropuerto Internacional de Toncontín que reclamaba la vuelta del depuesto presidente. Zelaya había aprobado una subida de los salarios de los trabajadores lo que supuso el apoyo de las clases trabajadoras y el enfado de los empresarios. Los seguidores de Micheletti también organizaron concentraciones de apoyo al nuevo Gobierno en ciudades como San Pedro de Sila o en la ciudad hondureña de Choluteca.

La situación de tensión aumentó aún más cuando Roberto Zelaya volvió a Honduras y se refugió en la embajada de Brasil el 21 de septiembre. Numerosos seguidores del depuesto presidente acudieron a mostrar su apoyo; por su parte, Micheletti presionó en numerosas ocasiones al Gobierno de Brasil para que entregara a Zelaya a las nuevas autoridades hondureñas para ser enjuiciado.

Las elecciones en Honduras de este pasado 29 de noviembre, han sido el resultado de cinco meses de crisis. Más de 30.000 policías y militares vigilaron el buen funcionamiento de los comicios. El candidato del opositor Partido Nacional, Porfirio Lobo, se convirtió en el virtual presidente de Honduras en las elecciones del 29 de noviembre, al obtener el 55,90% de los votos. Se impuso así al candidato del gobernante Partido Liberal, Elvin Santos, que apenas pasó del 30% de los votos. La participación alcanzó el 61,3% de la población de Honduras.

La crisis política está muy lejos de haberse ter-



minado, las divisiones entre los ciudadanos hondureños siguen latentes y el Gobierno resultante tiene la difícil misión de encarar muchos frentes internos y la aceptación de la comunidad internacional al haber nacido de un golpe de estado.

Descontento sindical

El movimiento sindical de Honduras denunció que el gobierno golpista aprovechó la situación para despedir a muchos empleados de diversas empresas para contratar a nuevos recomendados por las autoridades de facto. De hecho se realizó una campaña informativa en el país para dar a conocer la situación a muchos hondureños que no sabían en que situación se encontraba el país.

Una Misión Internacional de Derechos Humanos se constituyó para verificar las violaciones a los derechos humanos, concluyendo que se estaban aplicando normas abiertamente contrarias a los compromisos internacionales de protección del individuo. Esta misión acordó “establecer y mantener una red de apoyo material, moral y humana en respaldo a las acciones para la restitución de la democracia y el orden constitucional”.

Comisiones Obreras y sus fundaciones de Paz y Solidaridad han denunciado desde el primer momento el golpe de estado de Honduras, el rechazo al gobierno de Micheletti, el reestablecimiento de las libertades fundamentales de los hondureños y la vuelta a la presidencia de Manuel Zelaya. De hecho, se puso en marcha una recaudación de fondos para los compañeros y compañeras de los sindicatos de Honduras, los cuáles han librado una heroica resistencia para recuperar la institucionalidad democrática, el cese a la represión contra el pueblo hondureño y el rechazo a los golpistas.

El 22 de septiembre en la Facultad de Económicas de Zaragoza, se llevó a cabo una charla sobre la situación de Honduras tras el golpe de estado y las perspectivas de futuro abiertas en torno al Frente Nacional de Resistencia contra el mismo.

Golpe mortal a la lucha contra la impunidad y la Justicia Universal

Plataforma para la Justicia Universal

Malas señales para la comunidad internacional. El desprestigio está servido: España abandona la lucha efectiva contra la impunidad por la injerencia de criterios políticos, acudiendo para ello a un procedimiento apresurado y poco transparente, y pese a la oposición de más de 500 organizaciones nacionales e internacionales, asociaciones profesionales, sindicatos y miles de personas a título individual que han pedido a los senadores que reconsideren su voto y no restrinjan, hasta mutilarlo, el principio de Justicia Universal. El mes de octubre de 2009 pasará a la historia por el fraude a la justicia que supone la bochornosa reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta reforma supone la restricción del principio de Jurisdicción Universal hasta hacerlo casi inaplicable y suma a España a las tendencias más restrictivas en la aplicación de tan eficaz instrumento para combatir la impunidad. Con este principio se persigue a los responsables de los crímenes más graves y odiosos, como el genocidio o los crímenes contra la humanidad, que se hayan cometido fuera de España y con independencia de la nacionalidad de las víctimas y autores. La reforma debilita el régimen de derecho construido internacionalmente asumiendo una posición contraria a disposiciones de derecho internacional consuetudinario e inclusive instrumentos internacionales que vinculan a España como la Convención contra la Tortura o la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio o los Convenios de Ginebra, y desoyendo las recomendaciones de la ONU en la Resolución 3074 (XXVIII) de la Asamblea General de 3 de diciembre de 1973 sobre principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o

crímenes de lesa humanidad. Consideramos vergonzoso que con esta reforma vengan a exigirse requisitos de "conexión nacional" expresamente rechazados por el Tribunal Constitucional desde su sentencia en el caso Guatemala (2005), lo que pone en evidencia que el Ejecutivo, con la colaboración de la mayoría parlamentaria, apuesta por otros principios diferentes al respeto y defensa del derecho internacional y se amolda servilmente a mirar para otro lado cuando se cometen actos criminales. No podemos dejar de reseñar y agradecer los votos contrarios a la reforma de los diputados de IU e ICV, ERC y BNG en el último trámite ante el Congreso. Consideramos insólita la premura con que se ha impuesto esta "reforma exprés" que no sólo supone un uso heterodoxo del procedimiento legislativo sin haberse garantizado un mínimo debate, sino que se ha desinformado a la sociedad sobre su real inspiración y sobre sus trascendentales consecuencias jurídicas. La vaguedad de la redacción, su ambigüedad y contradicciones van a generar enorme discrecionalidad e inseguridad jurídica que perjudicará principalmente a las víctimas. Recordamos al parlamento español que el principio de Jurisdicción Universal no pertenece a España sino que pertenece a todos los Estados que tienen obligación de aplicarlo, y a todas las víctimas que tienen el legítimo derecho de buscar la justicia en otros países cuando no la encuentran en los suyos. Lamentamos que en un momento en el que lo que sobra es impunidad, las autoridades españolas lancen el mensaje de que España no se va a hacer comparecer ante sus tribunales a los responsables de los crímenes más atroces, favoreciendo de manera infame a los verdugos. No ha sido en nuestro nombre. Ha sido en contra de los derechos de las víctimas.

"Todavía recordamos con estremecimiento el testimonio de un abuelo indígena ixil de Guatemala ante el Juez Pedraz. Cuando el juez le pidió que fuera conciso porque el tiempo apremiaba, él -sonriente- le dio las gracias por escucharle y por lo que este juicio significaba para su pueblo, y mientras se abría los botones de la camisa, le dijo: "¿Cómo resumir treinta años de torturas, señor juez? Podemos empezar por aquí" y le enseñó las cicatrices de su pecho y le contó lo que vio y sufrió. Jamás un juez de Guatemala ha escuchado a un indígena por los cientos de masacres y terribles torturas que sufrieron a manos del ejército; jamás allí se ha llamado a declarar a un perito antropólogo para que rinda informe sobre las más de mil fosas comunes exhumadas; ni una sola mujer ha sido escuchada por las violaciones en masa que el ejército ordenó efectuar; y jamás un oficial del ejército ha

sido condenado por los crímenes que cometieron durante tan sangriento conflicto armado. Y ellos se saben impunes en su país. Al menos, el juicio abierto en España les dificulta pasearse con su botín por el extranjero. El pueblo se resistió durante décadas a la violencia, ha dicho que ya no quiere otro genocidio "Nunca Más" y ha vuelto a creer en que otra Guatemala es posible. Nosotros, por solidaridad, ofrecemos nuestro compromiso con el proceso y con la defensa de los derechos humanos en Guatemala. Una mujer indígena, en la Audiencia Nacional, ha podido contarle a un juez, 25 años después, quién asesinó a su hija y es consciente de que contarle puede costarle la vida. Pero se arriesga. Nosotros no cesaremos en nuestro modesto empeño hasta lograr que las víctimas puedan encontrar su merecida Justicia".

Sofía Duyos

Descontento sindical con la conferencia de la OMC

Critican la indiferencia ante las violaciones de derechos laborales

EL MOVIMIENTO SINDICAL internacional ha criticado la indiferencia ante sus planteamientos que han mostrado los gobiernos en la séptima conferencia de la Organización Mundial del Comercio, celebrada los pasados días 1 y 2 de diciembre. Solo algunos países, como Francia, Noruega e Indonesia, se han referido en sus discursos al tema de incluir las normas laborales fundamentales y los temas sociales, como el empleo, en los acuerdos comerciales. "Es curioso - señala la secretaria de internacional de Comisiones Obreras- que España, con un 18% de tasa de desempleo, no haya hecho en su intervención ninguna referencia a la importancia de relacionar los procesos de liberalización comercial con el objetivo de crear de empleo".

La conferencia se clausuró con algunas incertidumbres sobre la finalización de la ronda de Doha. En opinión de CCOO, aunque la mayoría de los países miembros de la OMC se han manifestado a favor de la conclusión de la Ronda en 2010 y han defendido que ello podría contribuir al incre-



Protesta contra la VII Conferencia Ministerial de la OMC en Ginebra, Suiza.

mento de los flujos comerciales y de esta manera a una pronta recuperación económica, los temas de conflicto y la posición de los principales países generan bastantes dudas sobre la consecución de dicho propósito.

EN MAURITANIA

CGTM expresa su solidaridad con los tres españoles secuestrados

El Comité Ejecutivo, y la presidente del Comité de Mujeres de la Confederación General de Trabajadores de Mauritania (CGTM) han enviado sendos comunicados a Comisiones Obreras condenando el secuestro de los cooperantes españoles.

Así, el pasado 1 de diciembre de este año, el Comité Ejecutivo de la CGTM envió una nota de prensa en el que tachaban este secuestro de acto terrorista y exigían la liberación inmediata de las tres personas secuestradas. Por otra parte, la presidenta del Comité de Mujeres ha hecho llegar una nota en la que expresa "su apoyo a las familias y al pueblo español por este gesto irresponsable, irreflexivo que hace sufrir a personas que vienen a ayudar (...) a personas necesitadas" y expresa su deseo de que sean puestos en libertad lo antes lo antes posible.

Visita en Lanzarote a Aminatu Haidar

CCOO demuestra su apoyo a la activista saharauí en Zaragoza



UNA DELEGACIÓN de la Secretaría de Internacional de Comisiones Obreras que se desplazó a principios de diciembre al aeropuerto de Lanzarote ha transmitido a Aminatu Haidar la solidaridad y el apoyo del sindicato, en

concreto el soporte jurídico que ayude a la resolución de su situación actual. CCOO, en el encuentro que mantuvo con la activista saharauí, le manifestó su compromiso con la causa del pueblo saharauí, y su deseo de alcanzar cuanto antes una solución definitiva del litigio que la mantiene en el aeropuerto de Lanzarote. La delegación confederal 2009 estuvo compuesta por Juan Ortega, Director de la Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga y Victoria Montero y Alejandra Ortega, de la Secretaría de Internacional.

Por parte de CCOO Canarias estuvo Montse Lorenzo Núñez, Secretaria de Cooperación e Internacional. La situación de Aminatu, a la que Marruecos denegaba la entrada al Sáhara, se resolvió el pasado día 17 de diciembre cuando un vuelo la llevó de vuelta a Al Aaiún tras 31 días de huelga de hambre. En Zaragoza CCOO Aragón realizó un paro de cinco minutos el tres de diciembre, en apoyo a la activista saharauí. En un comunicado conjunto el secretario general, Julián Buey, y Fátima Sida Natta, delegada del Frente Polisario en Aragón, pidieron responsabilidades a los gobiernos de España y Marruecos y la vuelta a casa de Aminatu.



Hablamos con... Cheibanni Abbas



“Nuestro objetivo primordial es conseguir la libertad del pueblo del Sáhara”

Jesús Martín López

Cheibanni Abbas nació en el campamento saharauí de Dakla, uno de los campamentos de refugiados de Tinduf. Su padre formó parte de la resistencia a la ocupación española y acabó refugiándose en Mauritania. Allí Cheibanni cursó tres años de estudios, pero tuvo que irse a Francia para realizar su formación superior. En 1975 participó en la guerra del Sáhara frente a Marruecos, por lo que fue obligado a salir del territorio polisario. En 1991 es nombrado representante sindical, lo que reafirma sus convicciones. Recuerda con satisfacción haber conocido a sindicalistas de renombre como Marcelino Camacho o Nicolás Redondo. En el año 2000 es nombrado secretario de Estado del Gobierno del Sáhara y en el 2008 delegado del Frente Polisario en Aragón. Abbas recibió a Global antes de irse a Uruguay para

desempeñar su nuevo puesto como embajador del pueblo saharauí en ese país.

¿Cuál es la situación actual del pueblo saharauí y en especial en relación al respeto de los derechos humanos?

La situación es muy precaria, el respeto a los derechos humanos es nulo. En octubre siete activistas del Frente Polisario fueron detenidos en Casablanca al regresar de una visita a los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia), un hecho que no tiene precedentes en los diez años de reinado de Mohamed VI. No encuentro en el discurso del rey de Marruecos voluntad de resolver el problema del Sáhara desde el pacifismo; no aboga por el dialogo ni por respetar las resoluciones de la ONU.



«El Sáhara es un territorio no autónomo, por lo que Marruecos debería dar una solución democrática al conflicto»



El frente Polisario lleva 36 años luchando por su libertad, de hecho este 14 de noviembre vamos a realizar una manifestación para protestar por el acuerdo tripartito firmado en Madrid en 1975 que en primer lugar repartía el Sáhara entre Mauritania, Marruecos y el Polisario y que en la actualidad deja a Marruecos en una posición privilegiada.

¿Qué responsabilidad histórica tiene España con el Sáhara?

España es el único responsable del tema. Tiene que aceptar su responsabilidad histórica cuando tomó la decisión de repartir el Sáhara entre tres estados. Debería presionar a Marruecos para que abandone el Sáhara y denunciar el acuerdo tripartito que se estableció en Madrid. El Gobierno español debería apoyar el referéndum del pueblo saharauí donde pudiéramos decidir sobre nuestra libertad.

Actualmente la tensión en la zona se va incrementado. ¿Qué posibilidades hay de que pueda derivar en un conflicto armado?

Los conflictos armados siempre tienen consecuencias negativas para ambos bandos, pero yo creo que Marruecos saldría más dañado por su situación interna. Su rey quiere establecer una democracia y se siente impotente al no conseguirlo, un conflicto armado le pondría más difíciles las cosas. Nosotros no deseamos realmente llegar a las armas, pero a veces parece la única solución para conseguir nuestro primordial objetivo: ser libres.

Marruecos pide la autonomía del Sáhara, pero con la soberanía sobre el territorio. ¿Qué actitud tiene el reino de Marruecos de cara al exterior y cuál es la que tiene con el pueblo saharauí?

El Sáhara es un territorio no autónomo, por lo que Marruecos no debe poner ninguna condición como ésta; debería dar una solución democrática. Sus alegatos no dan una posibilidad de diálogo y no tienen lógica alguna. Tiene miedo de aceptar el resultado de un referéndum libre y dejar al pueblo saharauí elegir libremente.



Cheibanni Abbas, junto a Fátima Sidda Natta, nueva delegada del Polisario en Aragón, y Julián Buey, secretario general de CC OO Aragón.

¿Qué visión crees que se tiene en Europa y más concretamente desde Aragón de la situación del Sáhara?

El interés que tiene Europa es que la situación en la zona del Magreb se vuelva más tranquila y estable. En el caso de España, la cercanía que tenemos geográficamente hace que le interese que cesen las revueltas de una vez por todas. Pero el Gobierno apoya al reino de Marruecos y a Francia y para mí esta actitud es lamentable.

¿Qué valor tienen para ustedes las acciones de asociaciones como la aragonesa UM Draiga?

La fuerza solidaria que hemos recibido representa al pueblo español al margen de su Gobierno. Asociaciones como UM Draiga ayudan a nuestro pueblo, convencidos del derecho de su autodeterminación.

«Durante 20 años los familiares separados por el muro de la vergüenza no podían verse, a pesar de los intentos de la ONU para acercarlos»

Las actividades de UM Draiga son múltiples: conciertos, actos de intercambio cultural y ayudas en la enseñanza y salud para gestionar la situación de los campamentos.

¿Creéis que los medios de comunicación informan correctamente sobre la situación en la zona?

No. Los medios hablan raramente del problema del Sáhara. El 14 de noviembre creemos que no tuvo suficiente repercusión mediática. La violación de los derechos humanos por parte del reino marroquí no aparece en las noticias. Recientemente dos abogados españoles han sido expulsados de los juicios a siete defensores de los derechos de los saharauis y no se le ha dado la repercusión necesaria.

El referéndum es la única solución viable que se propone al conflicto, pero... ¿quiénes deberían votar y en qué condiciones?

Estamos en el proceso de paz proclamado por la ONU. Hace poco nombraron como representante especial de la zona a Christopher Ross, el cual hizo un estudio del conflicto y propuso organizar un encuentro no oficial entre el Polisario y Marruecos para acercar posturas. La Organización de Naciones Unidas nos apoya en el alto al fuego; de hecho es la única organización que puede ser el árbitro en el referéndum. El Polisario se compromete a respetar el resultado, al igual que deberá hacerlo Marruecos.

Comisiones Obreras ha apoyado al pueblo saharauí y también denuncia la situación de los colonos en los territorios ocupados. ¿Qué proyectos tenéis en común para el futuro?

Comisiones Obreras es una organización que siempre nos ha estado apoyando en los momen-

UNA MIRADA RETROSPECTIVA

El conflicto del Sáhara Occidental tiene como raíz el proceso de descolonización no terminado con España en 1975. El acuerdo tripartito firmado en Madrid ese mismo año entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental estipulaba entre otras cuestiones la descolonización del territorio por España y daba la posibilidad al pueblo saharauí de realizar un referéndum mediante el que pudiera decidir su autodeterminación.

Marruecos, en la denominada "marcha verde", y sin ninguna intención de respetar el acuerdo, ocupó todo el Sáhara Occidental. Con la salida de España del territorio comenzó a librarse una guerra que enfrentó al Frente Polisario con sus vecinos del norte y el sur: Marruecos -que invadía el territorio por el norte,- y Mauritania -que hacía lo propio desde el sur-. En 1979, Mauritania, al borde de la quiebra, firma la paz con el Frente Polisario y renuncia a sus pretensiones sobre el territorio.

La invasión marroquí obligó a miles de saharauis a huir al desierto hasta territorio argelino, donde levantaron, cerca de la ciudad de Tinduf, campos de refugiados. Exiliados en ese rincón del desierto más duro del planeta, alrededor de 160.000 saharauis sobreviven desde hace 30 años en precarias condiciones esperando regresar a su tierra. En 1980 Marruecos construye el llamado "muro de la vergüenza" que divide en dos el Sáhara Occidental, una profunda herida de más de 2.700 kilómetros que atraviesa el desierto y separa a las familias saharauis.

Tras el alto al fuego firmado en 1991 el Frente Polisario reclama la posibilidad de un referéndum que en su día ya fue concebido como la única salida pacífica al conflicto. Pero, muy cerca de llegar a realizarse, el Gobierno marroquí, saltándose

las indicaciones de la ONU, pide la autonomía del Sáhara, pero con la soberanía sobre el territorio, una opción que no contenta al Polisario, que sabe de su derecho de autodeterminación. Este litigio se alarga durante treinta años y se salda con una guerra sin terminar, un pueblo dividido entre el exilio y la ocupación y una situación de inestabilidad que afecta a todo el Magreb.

Actualmente la tensión es la nota dominante entre las relaciones del Polisario y Marruecos, más aún cuando el pasado 8 de octubre siete defensores de los derechos saharauis fueron detenidos en Casablanca. Este hecho no ha tenido precedente en los diez años de reinado de Mohamed VI ya que los siete independentistas son juzgados por un tribunal militar. Estas detenciones han sido condenadas por numerosas organizaciones, desde Amnistía Internacional hasta la Fundación Robert Kennedy, pasando por el Centro Internacional Olof Palme.

El pasado 16 de noviembre, Aminatu Haidar, la activista saharauí que más galardones internacionales ha merecido, inició una huelga de hambre indeterminada en Lanzarote al ver cómo le privaban de poder volver a El Aainún, la capital del Sáhara Occidental de donde había sido expulsada por Marruecos. La expulsión de Haidar se enmarca en el endurecimiento de la política de Marruecos contra los independentistas que está llevando a cabo actualmente. Numerosas asociaciones, partidos políticos y sindicatos pusieron el grito en el cielo y no dudaron en apoyar a la defensora del pueblo saharauí. De hecho en Aragón, Comisiones Obreras no dudó en mostrar su apoyo a las reivindicaciones de Aminatu y se sumó a la concentración convocada en Zaragoza frente a la delegación del Gobierno el día 17 de noviembre.

tos más difíciles. Los dirigentes de este sindicato han visitado los campamentos aun cuando estaba prohibido el acceso. Nos han ayudado en la formación, en sus publicaciones y queremos continuar con este vínculo en el futuro.

¿Cómo es la vida dentro de un campamento saharauí?

La vida durante estos últimos años se ha hecho muy difícil. Vivimos en una situación que no es de guerra ni de paz. Los niños polisarios han asumido la responsabilidad de su formación, saben que en 1975 se consolidó la República Federal Saharaui. La educación es gestionada por el Gobierno saharauí. Se ha creado un programa escolar hasta secundaria pero después mandamos a los jóvenes a que continúen su educación en países aliados como Argelia

o Cuba. También estamos haciendo esfuerzos muy grandes en el campo de la salud, construyendo hospitales y dispensarios donde almacenar los medicamentos.

En estos días se celebra el 20 aniversario de la caída del Muro de Berlín, pero en el Sáhara ocurre algo parecido. ¿Qué es el "Muro de la Vergüenza"?

Es un muro que ha partido el Sáhara en dos partes (Marruecos y Polisario). Ha sido una estrategia marroquí para defenderse de nuestra lucha y demuestra su debilidad. El muro no permite que las relaciones entre las familias sean fluidas: durante veinte años los familiares separados por el muro no podían verse. La ONU ha organizado viajes para poder cruzar el muro, pero para nosotros no es suficiente.

El Comité Internacionalista, una apuesta por la transformación

Redacción



Esta ONG nació a principios de los 80 con el nombre de Comité de Solidaridad con Nicaragua en Zaragoza, a raíz de los fuertes lazos que se establecieron con el país centroamericano y en 1992 cambió su nombre por el de Comité de Solidaridad Internacionalista, pues ya había extendido su labor al resto de América Latina y a otros territorios que sufrían, y todavía lo hacen, la ocupación: Palestina y el Sáhara Occidental. Su presidente, Juan Carlos Burillo, subraya que el Comité “asume como propias tanta las injusticias que sufren esos pueblos como las ilusiones que tratan de cambiar su realidad”. Pero la labor del Comité va más allá de la mera gestión de una ayuda o cooperación: pretende un trabajo desde la “solidaridad política”, esto es, para la transformación de esas sociedades. “No les ayudamos porque sean pobres y sintamos compasión por ellos. Estamos a su lado porque nos sentimos agredidos cuando sus derechos son pisoteados, cuando sus casas son destruidas, cuando sufren el desplazamiento, la violencia o la muerte. Estamos a su lado porque compartimos el sueño común de un mundo

más justo en el que los recursos se distribuyan entre todos y nos se entreguen a quienes sólo piensan en el propio lucro. Y pensamos que es posible construir ese otro mundo que ha de ser para todos los seres humanos o no será”, reclama Burillo.

Aún así, se desmarcan de cualquier adscripción a partidos políticos “de este o del otro lado del mundo” y defienden que la solidaridad “no pertenece a la esfera privada ni a la beneficencia, sino a la esfera pública, a la acción colectiva y organizada de la ciudadanía que promueve el cambio de la realidad aquí y allá”. Es en este sentido en el que reconocen su pretensión de “influir sobre nuestros representantes políticos para instarles a que exijan mayor respeto a los derechos humanos en las relaciones internacionales, y para que presten atención a conflictos y situaciones que muchas veces se olvidan o se ocultan deliberadamente”.

Otra característica del Comité es el trabajo voluntario y militante. Nadie percibe retribución por su trabajo en la organización y la forma de trabajo es la participación directa a través de



asambleas. “Creemos en la participación permanente frente a la demasiado habitual delegación, tan frecuente en la actuación de nuestra actuación política y social”, explica su presidente. Este ideario engloba también la economía de la organización, basada en la independencia y en la continuidad de la acción. “Siempre hemos procurado tener unos gastos de funcionamiento mínimos. Si hay una subvención para una actividad podemos sacar los carteles a colores y hacer una buena tirada, y hasta mandarlos por correo. Si no, hacemos fotocopias o los distribuimos por internet para que cada cual se lo imprima, pero no dejamos de hacer lo que nos parece importante”, destaca el presidente del Comité.

“Puente de solidaridad”

Durante estos años, el empeño principal de la organización ha sido establecer un “puente de solidaridad internacionalista” entre los pueblos de Aragón y los países con los que colabora a

través de campañas y actividades de sensibilización en esos lugares y con brigadas de trabajo y acompañamiento. Todo ello, sin dejar de lado la ejecución de proyectos financiados con fondos propios o de las instituciones públicas. Burillo aclara que para el Comité “Aragón no es sólo Zaragoza” y que la organización desarrolla buena parte de sus actividades en localidades de las tres provincias. “Tenemos claro que solos no llegamos a ninguna parte”, añade, por lo que la ONG mantiene coordinación y trabajo en red con otras organizaciones de la Comunidad Autónoma, del Estado y de varios países europeos, lo que les permite “racionalizar recursos y realizar campañas que de otra manera estarían fuera del alcance de una organización tan pequeña como la nuestra”. Es misma diversidad y transversalidad llega a sus miembros, entre los que se cuentan estudiantes, obreros, pequeños empresarios, funcionarios, parados, militantes de partidos o sindicatos y gente que nunca a pertenecido a otra organización.

ASA, una mirada comprometida a los pueblos del Sur



Acción Solidaria Aragonesa (ASA) es una de las ONG con mayor antigüedad de Aragón. Surgió en 1985 a partir de una convocatoria de varias organizaciones para reflexionar y debatir qué hacer ante la grave sequía del Sahel. Este fue el punto de arranque que les abrió la mirada hacia la realidad de los países del hemisferio Sur y después de todos estos años, "ahí seguimos comprometidos en la tarea de hacer un mundo mejor para todos y todas", comentan.

Allí se configuró un estilo de organización que hoy, 24 años después, siguen manteniendo: un modelo asambleario en el que las decisiones y las responsabilidades se reparten entre todos, el voluntariado es la base del trabajo y la comunidad aragonesa el ámbito de actuación. "Las bases ideológicas de Acción Solidaria Aragonesa se definieron en los inicios de la organización y, con el tiempo, han demostrado su validez para dirigir nuestra acción y como fundamento de nuestros análisis de la realidad en dos aspectos" mantiene María Rosario Marín, presidenta de ASA.

En primer lugar debe "ser plural y abierta en el aspecto confesional y de adscripción a un partido, pero comprometida con la defensa de un orden mundial basado en la justicia, la solidaridad y la igualdad entre los pueblos". Valores que se enmarcan en una crítica radical (en el sentido literal: profunda, que va a la raíz de los problemas) al estado de cosas existente.

ASA rechaza el modelo capitalista imperante y

ante él opone una concepción de progreso respetuosa con la naturaleza y propiciatoria de una relaciones sociales igualitarias y solidarias entre todos los pueblos del mundo. "Defendiendo, apoyando y cooperando con todas aquellas iniciativas y proyectos que, partiendo de los propios colectivos y movimientos sociales explotados o marginados del sistema, persigan la construcción de alternativas al modelo desarrollista y consumista que padecemos", remarcan desde la ONG.

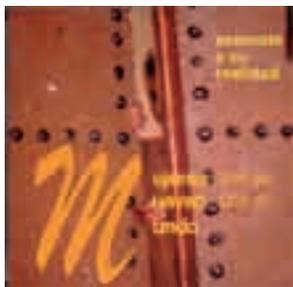
Organización

El trabajo se organiza en torno a tres comisiones: difusión, educación y proyectos. La comisión de difusión tiene como función promocionar y difundir el trabajo de ASA así como conectar con los medios de comunicación y entidades para intercambiar información y tener una presencia activa en ellos. "Promocionar ASA quiere decir que cada vez un número mayor de personas de Aragón la conozca como cauce de solidaridad hacia los países del Sur y como referencia crítica a las injusticias del mundo de hoy. En definitiva crear conciencia", apunta Marín.

Esta comisión se encarga de la elaboración de trípticos, calendarios, tarjetas. Las herramientas fundamentales de difusión son la revista "¿Y el Sur?", la hoja mensual y la página web.

La comisión de educación coordina la participación en cursos, talleres, charlas etc.; la adquisición y elaboración de materiales educativos, exposiciones y la relación con centros educativos. “La labor educativa era fundamental y, por ello, se impulsó un centro de recursos donde ofrecer materiales y actividades a centros educativos, centros de profesores y centros sociolaborales”, señala la presidenta de ASA. Desde hace 24 años organizan en enero un ciclo de cine sobre distintos temas relacionados con dependencia Norte-Sur, derechos humanos, mujer, infancia, medio ambiente, África, etc. También han realizado un ciclo de cine sobre el conflicto palestino-israelí desde hace dos años.

Finalmente, la comisión de proyectos colabora con iniciativas que surgen de las organizaciones de base de los países del Sur, dirigidas a cubrir las necesidades y carencias que ellos vean



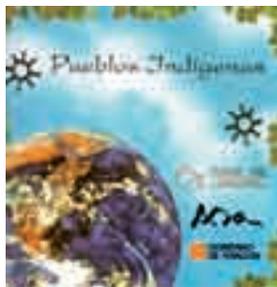
más cercanas y de mayor importancia. “En estos momentos estamos apoyando proyectos que potencian la formación, la organización, la defensa de los derechos humanos y la atención a colectivos más vulnerables como son los pueblos indígenas, las mujeres, o la infancia”, explica Marín. Dichos proyectos están ubicados en los países latinoamericanos de Colombia, Perú, Nicaragua, Guatemala y el Salvador; en África se ubican en el Chad, la República Democrática del Congo y en Guinea Ecuatorial; y en Filipinas como representante asiático.

ASA concibe el trabajo solidario en relación con otras organizaciones que trabajan en este campo. Es por ello que forman parte de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS). “Es desde la unión desde donde podemos ir consiguiendo pequeños o grandes retos que nos plantea este mundo tan polarizado en el que vivimos”, asegura Marín.

Centro de recursos

Para desarrollar las actividades de sensibilización disponen de un centro de recursos formado por materiales actualizados y pensados es-

pecialmente para ser utilizados por profesores en el aula y educadores sociales en centros Escolares, casas de juventud, residencias de menores, centros tutelados, centros de adultos, asociaciones, etc.



El centro de recursos edita periódicamente guías de materiales en las que se actualiza su oferta. También se han elaborado guías para trabajar en la educación formal y no formal en temas como los Derechos Humanos, la situación de la mujer, la celebración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz (DENIP). Entre los recursos con los que cuentan tienen libros, material didáctico, documentales, películas y revistas. Los temas que se encuentran están englobados dentro del ámbito de la cooperación internacional, el desarrollo social y la sensibilización.

REFLEJOS DE UN INJUSTO CONTRASTE

Acción Solidaria Aragonesa ha creado un ciclo de cuatro exposiciones sobre los países subdesarrollados donde podemos ver las diferencias entre el Norte-Sur y las características de los diferentes pueblos de nuestro planeta.

- “Derechos Humanos mirando al Sur”, se compone de 20 carteles con texto y fotografía. Propone una lectura actualizada de los derechos humanos para una interpretación de la actual situación internacional.

- “Mujeres que se mueven por el mundo” es un enfoque interdisciplinar sobre la realidad de la mujer en el mundo. Se puede obtener un CD-ROM con los contenidos de la exposición que contiene 35 portales distribuidos en los siguientes temas: educación, trabajo, sexualidad, medio ambiente, salud, política y derechos humanos.

- “Los Embera Chami; un pueblo en el olvido” es una muestra fotográfica sobre el pueblo indígena, resultado de un proyecto que se ha llevado a cabo con ellos en colaboración con una ONG local colombiana y el Ayuntamiento de Zaragoza.

- “Pueblos indígenas” pretende llamar la atención sobre la riqueza que representan las 5.000 culturas diferentes que hay en el mundo, y también sobre las injusticias que sufren las comunidades desheredadas por el abuso de poder en las relaciones Norte-Sur y la vulneración de los derechos humanos.

La exposición viene acompañada de material didáctico y contiene además un CD-ROM orientado al alumnado de educación secundaria.



Multinacionales y Derechos Humanos

Javier Lázaro

Director de Paz y Solidaridad Aragón



“El conflicto más importante del siglo XXI será la batalla entre las gigantescas empresas y la democracia” Esta frase de George Monbiot, incluida en la portada del libro titulado “Europa, SA: la influencia de las multinacionales en la construcción de la UE”, ilustra la suerte de conflictos que a lo largo de los últimos sesenta años han protagonizado las empresas multinacionales, cuyo poder ha situado entre sus intereses el control del propio sistema democrático.

La reflexión sobre los procesos de cambio provocados por la instauración de un modelo único de mercado a nivel global y la dependencia de la inversión extranjera directa para el desarrollo económico ha reclamado el estudio y análisis de los importantes efectos que dichos procesos tienen en la vida de los individuos. Y, consecuentemente, sobre los sistemas de protección de sus derechos humanos. Y aunque las iniciativas para el establecimiento de un marco jurídico para el control de las multinacionales no son nuevas, sí lo es el contexto en el que se desarrollan: la demanda de una globalización más justa y equitativa, en la que el desarrollo económico tenga un efecto positivo sobre el disfrute de esos derechos.

La globalización de la economía y el desarrollo del capitalismo financiero en los últimos años del siglo XX no podría explicarse sin analizar la expansión y poder alcanzado paralelamente por las empresas multinacionales. Éstas surgieron con las inversiones directas de Estados Unidos en Europa a partir de mediados del siglo XX, cuyas actividades están presentes en la industria, el comercio y el sector financiero. Este fenómeno se hizo mundial cuando se sumaron a él las empresas europeas y japonesas. En la actualidad, se han incorporado también países emergentes como China, India, México, Brasil y los del sudeste asiático.

Para evitar competencias molestas, controlar los mercados e imponer los precios a su conveniencia, estas compañías potencian el proceso de concentración y acumulación de empresas de diversos sectores, de manera que unas pocas firmas, ya sea directamente o a través de sus filiales, han conseguido dominar la producción a escala mundial en algunos sectores, formando auténticos oligopolios.

Aunque la mayoría de estas empresas pertenecen a países desarrollados, donde cuentan con



un número importante de filiales y concentran la mayor parte de las inversiones, en los últimos años han crecido vertiginosamente sus inversiones en los países menos desarrollados, atraídas por una mano de obra abundante y barata, un trato fiscal muy favorable y una legislación permisiva o inexistente en materia de salud y seguridad laboral o protección del medio ambiente, compitiendo entre ellos para ser los receptores de estas inversiones, creando todo un submundo laboral en torno a sus actividades, destacando la represión antisindical como una de sus principales señas de identidad.

El poder económico de estas multinacionales está muy concentrado. Aunque se calcula en más de 95.000 el número de empresas multinacionales, sólo 100 firmas concentran el 13% de los trabajadores y el 14% de las ventas mundiales. Una multinacional como la General Motors tiene unos ingresos similares a la producción de Dinamarca, y la petrolera Exxon tiene un presupuesto mayor que Suecia. Estos datos ilustran el enorme poder que pueden desplegar estas em-

presas y cómo pueden condicionar la economía, la política y la sociedad mundiales.

En las democracias occidentales han aparecido grupos de poder (lobbies) con el objetivo de influir en los gobiernos de las naciones. Las oficinas de la UE en Bruselas son invadidas por

grupos de presión de toda índole, pero son las compañías multinacionales las que despliegan el mayor número de efectivos y la financiación de múltiples campañas e informes para asegurarse el control de sus inversiones, condicionando las leyes y normas que les afectan. Con frecuencia, antiguos directivos de una gran empresa pasan a formar parte del gobierno y viceversa. Estas prácticas son ya tan comunes que no causan extrañeza y, lo que es más sorprendente, se acep-

Aunque hay más de 95.000 firmas multinacionales, sólo un centenar de compañías concentran el 13% de trabajadores y el 14% de ventas mundiales



La responsabilidad de las firmas multinacionales debería estar sometida a una legislación transnacional y ser evaluada por un tribunal de carácter global

tan como una forma más de las reglas del juego del mercado.

Yaunque sabemos que uno de los principales objetivos de estas compañías multinacionales es la atrofia del Estado y el control de las esferas políticas donde se adoptan las decisiones que pueden afectar sus intereses, las herramientas

utilizadas para alcanzarlos no son inocuas y en muchas ocasiones llegan a la violación de los derechos humanos.

En ese contexto, la responsabilidad de las multinacionales debería estar sujeta a una legislación internacional y ser evaluada por un tribunal de carácter global, dependiente de Naciones Unidas. Así lo reclama un estudio del Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL), elaborado junto a la Universidad del País Vasco, que bajo el título "El negocio de la responsabilidad. Crítica de la Responsabilidad Corporativa" pone en tela de juicio la efectividad de la autorregulación como medio para que las grandes empresas garanticen el respeto de los derechos humanos en el Tercer Mundo.

Según sus autores, «no tiene ningún sentido que los derechos de las grandes corporaciones se protejan mediante la fuerza de la *lex mercatoria*, mientras que sus obligaciones a nivel ambiental, laboral y social se dejan en manos de la ética». Por ello, reclaman la creación de un código normativo internacional que delimite las responsabilidades legales de las multinacionales y piden la puesta en marcha de un Tribunal Internacional de Transnacionales y de un Centro de Estudios y Análisis sobre Multinacionales en el seno de la ONU.

En ese mismo contexto se sitúa la difusión de dos informes elaborados por el relator de la ONU para los derechos humanos, Martin Scheinin, y por el relator para la tortura, Manfred Nowak, que han puesto de nuevo sobre la mesa la pertinencia de instaurar una Corte Mundial para los Derechos Humanos en la que puedan juzgarse los abusos cometidos por las grandes corporaciones.

Este debate no es nuevo, ya que en la década de los 70 tuvo lugar en la ONU una discusión sobre la firma de unas normas internacionales que regulasen las operaciones de las empresas transnacionales. Pero a lo largo de los años 80 y, sobre todo, de los 90, las presiones empresariales hicieron que se fuera desactivando la posibilidad de exigir una normativa vinculante al respecto. A la vez, impulsado por las escuelas de negocios y las propias compañías multinacionales, fue

ganando peso el discurso de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), un paradigma de gestión empresarial basado en la autorregulación, la unilateralidad y la no exigibilidad jurídica.

No obstante, y aun con esos antecedentes, es muy positiva la iniciativa, en la medida que es la primera vez que se redacta un proyecto así por parte de expertos de Naciones Unidas. Los documentos responden a un encargo de la llamada Iniciativa Suiza, dirigida por la ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, con el objetivo de fijar los objetivos más apremiantes en este campo.

Las empresas españolas

Greenpeace ha analizado aquellos sectores con mayor potencial de causar daños al medio ambiente o los derechos humanos (como los hidrocarburos, la electricidad, la pesca o el turismo, entre otros) y los ha "cruzado" con la presencia de empresas españolas significativas. Del análisis de estas dos variables salen 43 casos que son recogidos en el informe, aunque el número real puede ser mucho mayor. Este informe ha sido realizado por Greenpeace España, con el apoyo de las oficinas de la organización en México, Brasil, Chile y Argentina, así como de otras organizaciones latinoamericanas, y recoge cómo empresas españolas están involucradas en situaciones de destrucción del medio natural, violaciones de derechos humanos y abusos laborales. "Queremos contar aquello que no se dice en las juntas de accionistas ni en la publicidad de estas empresas, y que la población española sepa cómo actúan al otro lado del Atlántico", ha afirmado Mabel González, responsable de la campaña de conflictos y medio ambiente.

España se situó en 2008 como el octavo país del mundo en Inversión Extranjera Directa, y 11 multinacionales españolas figuran en la lista Fortune Global 500, que clasifica a las mayores del mundo. Hoy ocupan los primeros puestos en muchos países latinoamericanos en sectores como hidrocarburos, electricidad, turismo, pesca, etc.. Sus actividades han sido objeto de frecuentes críticas y resistencias locales. El informe "Los nuevos conquistadores" recoge los principales casos, centrándose en aquellos donde las empresas españolas tienen un protagonismo importante y en sectores donde se causan graves daños al medio ambiente y los derechos humanos. Algunos ejemplos de ellos son los siguientes:

- Endesa quiere construir en la Patagonia chilena cinco grandes represas que arrasarán un ecosistema virgen y que han suscitado un gran rechazo local. Recientemente ha pedido más de 14 años de cárcel y multas mi-



LOS ABUSOS SE CENTRAN EN PAÍSES DEL SUR

Pfizer experimentó con niños en Nigeria

Las autoridades de Kano, en Nigeria, llevaron a los tribunales a la mayor compañía farmacéutica del mundo, Pfizer, en mayo de 2007. Acusaban a la multinacional de la muerte de 11 niños y heridas de por vida a otros 181 durante las pruebas para comprobar la eficacia del medicamento Trovan, realizadas durante una epidemia de meningitis en 1996 que mató a 12.000 niños. El caso inspiró a John Le Carré, que escribió 'El jardinero fiel'. Kano pedía una indemnización de 1.421 millones de euros y el Gobierno federal, otros 4.600 millones. La compañía dijo que las muertes fueron debidas a la epidemia y no a la medicina, pero el pasado abril aceptó pagar 55 millones de euros para evitar el juicio.

La complicidad de Shell en el Delta del Níger

El pasado 9 de junio, la petrolera angloholandesa Shell se avino a pagar una indemnización de 11,1 millones de euros a los familiares de los nueve activistas de la etnia ogoni, liderados por el poeta Ken Saro Wiwa, que fueron ejecutados en 1995 por el dictador nigeriano Sani Abacha por denunciar la contaminación que la petrolera causaba en su región. Shell evitó con dicho acuerdo el tener que sentarse en el banquillo de un tribunal federal para responder de la acusación de complicidad en graves violaciones de derechos humanos y torturas. Los demandantes sostenían que Shell aprovisionó con armas a los soldados que fueron enviados a la zona para reprimir las protestas contra la petrolera.

Dow Chemical no se da por aludida en Bhopal

El próximo 3 de diciembre se cumplirán 25 años del desastre de Bhopal (India): negligencias en el mantenimiento de la fábrica de pesticidas de la compañía estadounidense Union Carbide provocaron la fuga de más de 27 toneladas de gas letal. Murieron de forma inmediata 3.000 personas y se estima que la



cifra final de fallecidos se acercó a las 20.000, con 600.000 afectados, de los cuales 150.000 sufrieron graves secuelas. Nunca se han pagado indemnizaciones ni se ha dictado condena. Ni siquiera se han limpiado las aguas subterráneas de la zona. Union Carbide acabó en manos de Dow Chemical, que nunca se ha dado por aludida.

El desastre del 'Exxon Valdez' salió barato

En 1989, el buque 'Exxon Valdez' derramó en Alaska 37.000 toneladas de hidrocarburo, que se expandió por más de 2.000 kilómetros de costa. Han tenido que pasar 20 años para que un tribunal haya condenado en firme a la petrolera Exxon Mobil a indemnizar a las víctimas. El desastre le ha acabado saliendo barato a la compañía texana: un tribunal federal de apelación rebajó el pasado mes de junio a 365 millones de euros la indemnización que deberá abonar la empresa, lo que sumado a intereses y costas judiciales puede llegar hasta 435. La cifra es, en cualquier caso, muy inferior a la sentencia inicial, del año 1996, que la fijaba en 3.600 millones de euros.

llonarias para activistas de Greenpeace que desplegaron una pancarta pidiéndole poner fin a este proyecto.

También Endesa, junto a Unión Fenosa e Iberdrola apuestan en América Latina por la generación de energía sucia y basada en fuentes no renovables. Unión Fenosa e Iberdrola encabezan un proyecto para construir cinco centrales eléctricas de carbón en Guatemala.

■ Repsol ha causado vertidos y graves daños al medio ambiente en Ecuador, Argentina y

Bolivia; ha violado los derechos de comunidades indígenas y ha sido acusada de fomentar la violencia en Colombia.

■ Empresas turísticas españolas como Sol Meliá o NH están fomentando en varios países, pero especialmente en México, un modelo de turismo depredador que arrasa con bosques de manglares costeros y con zonas vírgenes.

■ Pescanova ha practicado la sobreexplotación de recursos pesqueros en Chile, mientras Calvo ha sido acusada de contaminación



y de violación de los derechos laborales en El Salvador.

- El Banco de Santander está siendo duramente criticado por financiar varias represas en el río Madera, en Brasil.
- El BBVA ha sido denunciado por financiar, entre otros, el proyecto gasífero de Camisea (Perú) y el Oleoducto de Crudos Pesados (Ecuador), proyectos muy agresivos social y ambientalmente.

El Gobierno español debe exigir a las empresas españolas que operan en otros países que cumplan los principios y estándares internacionales en materia de derechos humanos, medio ambiente y buen gobierno. La concesión de ayudas o apoyo público para su expansión exterior debe estar ligada a exigencias y parámetros claros de responsabilidad. No se puede fomentar desde el Estado un comportamiento depredador con las poblaciones locales y el medio ambiente, incumpliendo todos los tratados que España ha firmado, aunque se vulneren fuera de sus fronteras. Resulta desalentador y preocupante que las inversiones españolas, a través de empresas transnacionales, apenas han contribuido a solucionar las graves desigualdades en estos países.

Un activista más muerto

En ese contexto, el pasado 24 de octubre moría asesinado el dirigente del Frente de Resistencia de los Recursos Naturales, Víctor

Gálvez, en Malacatán (Guatemala). Gálvez mantuvo una lucha permanente contra los atropellos de la Distribuidora de Energía Eléctrica de Occidente Sociedad Anónima (DEOCSA), filial de Unión Fenosa,

cometidos contra los usuarios de este servicio. Las irregularidades cometidas por DEOCSA motivaron al dirigente a organizar a los usuarios del fluido eléctrico de la zona de la costa de San Marcos, con el objetivo de plantear propuestas para evitar que el servicio se convierta en un medio de explotación económica. Naturalmente, el crimen sigue sin resolverse, dado el grado de impunidad y corrupción de buena parte de la judicatura guatemalteca. La lucha de Gálvez estaba unida a otras muchas luchas de comunidades indígenas que vuelve a sentir la amenaza de expulsión de sus tierras, como consecuencia de nuevas explotaciones mineras e hidroeléctricas, algunas de las cuales son de capital español.

Deberíamos reflexionar en profundidad sobre todo ello e intentar cambiar el marco legal en el que operan estas compañías, ya que no es difícil imaginar cómo una decisión adoptada en un respetable despacho de alguno de esos enormes edificios del paseo de la Castellana de Madrid puede acabar con la vida de un dirigente popular de una apartada aldea centroamericana.

El Gobierno debe exigir a las multinacionales que respeten los derechos humanos y el medio ambiente



La lucha por la dignidad de los “sin tierra” de Brasil

Juan Carlos Burillo García

Presidente del Comité de Solidaridad Internacionalista

El MST, Movimiento dos Trabalhadores Ruraes Sem Terra, es desde hace ya bastantes años uno de los movimientos sociales más importantes e influyentes de América Latina. Casi dos millones de personas, unas 500.000 familias, están organizadas en este movimiento que extiende su influencia por todo el mundo a través de la Vía Campesina. Pero lo más importante no es su tamaño, sino la calidad del mismo: una alternativa real al modelo social imperante, un sistema de organización participativa y en constante dinamismo, una organización que piensa en global y actúa en local, que camina desde la dura realidad concreta de los campamentos y asentamientos de reforma agraria, hacia la utopía del socialismo.

Brasil es un gigante tanto por su territorio como por el volumen de su economía, una de las mayores del mundo. Pero también su nivel de desigualdad social es enorme, y mientras el 1% de la población acumula la mayor parte de la riqueza del país, más de 20 millones de brasileños y brasileñas viven en la pobreza más absoluta, al mismo nivel que en los países más pobres de América o África.

El MST constituye una alternativa a la situación de hambre y marginación en que viven esos mi-

llones de brasileños: la vuelta al campo, a vivir de la tierra, con sus grandes dificultades pero con el fuerte apoyo de la organización, permite que miles de personas que apenas sobrevivían en las favelas de las periferias urbanas puedan vivir con dignidad, seguridad y autonomía haciendo producir las parcelas de tierra que consiguen conquistar.

Las reivindicaciones del MST no terminan cuando se consigue la tierra: también reclaman educación y asistencia sanitaria de calidad, créditos para sus cooperativas o ayudas para una vivienda digna, por eso no es de extrañar que en su país los gobiernos de turno, aun cuando se llamen de izquierda, no faciliten nada este proceso, sino que le pongan toda clase de trabas y dificultades, e incluso criminalicen a sus dirigentes. Por eso requieren de la solidaridad internacional tanto para defenderse de estas agresiones como para completar su proyecto social.

La solidaridad de la sociedad aragonesa con el MST se concretó en los años 90 en la campaña internacional Terra, que con el soporte de la exposición elaborada sobre las fotografías que el afamado fotógrafo Sebastião Salgado realizó para el movimiento, recorrió decenas de poblaciones aragonesas y sirvió para recaudar unos

fondos que junto con los que se obtuvieron en todo el mundo con esa campaña permitieron construir la ENFF, Escuela Nacional Floristán Fernandez, una auténtica universidad de los movimientos sociales. Allí se han formado no sólo miles de militantes del MST sino también de otros muchos movimientos sociales de Brasil, de toda América Latina, e incluso de bastantes países de África y el Sudeste Asiático.

Desde 2004 nuestra solidaridad se ha complementado con los fondos de cooperación al desarrollo que ha aportado el Gobierno de Aragón a los diferentes proyectos que hemos presentado en consorcio la UAGA (Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón) y el Comité de Solidaridad Internacionalista.

Los principios del movimiento

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sem Terra es una organización netamente brasileña, y como tal su ámbito de actuación es únicamente ese inmenso país, mayor que toda Europa junta. Surgió a principios de los años 80 de lo que quedaba de los diversos focos de lucha por la tierra que se habían desarrollado en las décadas anteriores y que habían sido sofocados por la dictadura militar. Se constituyó como movimiento en 1984 y este año está celebrando su 25 aniversario. Tiene presencia en 24 de los 26 estados en que esta dividido administrativamente el país. Para hacernos idea de la dimensión del MST..., ¿podemos imaginarnos un movimiento social con este dinamismo y actuando en 24 de los 27 estados de la Unión Europea?

El movimiento se define como una organización sindical, política y de masas, pues lucha para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores rurales, tiene un proyecto político para toda la sociedad que va más allá de la concreta lucha de la reforma agraria y quiere ser una organización que organice a buena parte de los campesinos brasileños. Pero no entiende que la política tenga que realizarse necesariamente a través de las instituciones y los procesos electorales; por eso no permite que sus dirigentes se presenten a las elecciones por ningún partido político ni accedan a cargos públicos.

Su actividad política se desarrolla desde la base y a través de la movilización y la confrontación pacífica. La acción que les ha caracterizado desde sus inicios como movimiento es la ocupación de tierras improductivas susceptibles de reforma agraria, para hacerlas producir: ocupar, resistir, producir. Resistir, porque entre una ocupación y la solución a veces transcurren diez años, cinco de media, y entre tanto los sin tierra tienen que vivir en unas condiciones durísimas, bajo tiendas de lona o plástico, o tablas de madera, y muchas

veces con desalojos o bloqueos de la policía o de los matones contratados por los terratenientes.

A lo largo de estos 25 años de luchas se han realizado más de 2.500 ocupaciones, en las que han participado 370.000 familias y con las que se han conquistado 7,5 millones de hectáreas.

Pero este no es un proyecto acabado y en la actualidad quedan cerca de 900 campamentos que no han conseguido legalizar sus tierras. Unas 150.000 familias están viviendo bajo la lona, o las tablas, luchando y resistiendo para que el Gobierno brasileño haga realidad sus promesas electorales y se cumplan la Constitución y las leyes que dicen que la tierra improductiva debe entregarse en reforma agraria.

A lo largo de estos años el MST ha conseguido establecer acuerdos y convenios con diversas instituciones brasileñas, tanto locales como de los estados o del Gobierno Federal, para desarrollar proyectos productivos, educativos, de salud, de formación, de construcción de viviendas o de comercialización. La confrontación que permanente mantiene con los poderes económicos tanto de los terratenientes como de las multinacionales, hace que el movimiento sea un objetivo declarado de las fuerzas reaccionarias que buscan y consiguen algunas veces echar atrás los avances conseguidos. Tampoco el Gobierno Federal encabezado por Lula ha cumplido, ni parece que vaya a cumplir, sus promesas electorales de agilizar y profundizar la reforma agraria. Más bien ha dedicado sus esfuerzos a fomentar la producción de agrocombustibles y materias primas para la exportación, lo que equilibra su balanza comercial con el exterior y aumenta los beneficios de las multinacionales, aún a costa de entregar a éstas las tierras que deberían haberse destinado a la reforma agraria.

En esta situación el movimiento ha buscado diversificar las fuentes de las ayudas que recibe para sacar adelante sus diferentes proyectos y ha buscado y conseguido aportes de algunas organizaciones de cooperación europeas y americanas.

El proyecto de la Brigada Nacional

De ahí que nuestra solidaridad se convirtiera también en cooperación. Desde 2004 y con la financiación del Gobierno de Aragón, UAGA y El Comité Internacionalista hemos venido desarro-

Las demandas no terminan cuando se consigue tierra: también reclaman educación y sanidad de calidad y ayudas para la vivienda

Cooperación a fondo

La acción que les ha caracterizado ha sido la explotación de tierras susceptibles de reforma agraria: ocupar, resistir, producir

llando en varios estados de Brasil un proyecto que básicamente consiste en que los militantes de los diversos estados en que el movimiento mantiene una fuerte presencia y ha desarrollado numerosas experiencias organizativas, productivas y de formación se desplacen a las zonas

donde se detecta que el movimiento tiene más dificultades o debilidad, para transmitir allí sus experiencias, reforzar la organización y conseguir unas mejores condiciones de vida para los sin tierra.

Estos militantes lo hacen como voluntarios y conforme a la ley brasileña del voluntariado, no perciben salario por su actividad, sino únicamente por sus gastos de desplazamiento, algunos gastos de manutención y el seguro médico que corren a cargo del proyecto. Su alojamiento se realiza en los propios asentamientos, campamentos y centros de formación en los que se desarrolla el proyecto. El grupo de militantes que realiza este trabajo recibe el nombre de Brigada Nacional y está coordinada y dirigida por el sector de formación del MST. Normalmente la actividad a desarrollar por la brigada en cada estado o grupo de estados incluido en el proyecto, requiere una permanencia sobre el terreno de dos años, pues todo el trabajo se realiza en la base del movimiento, en los núcleos que agrupan a las familias en los asentamientos y campamentos.

El compromiso asumido por los militantes cuando se integran en esta brigada es también de dos años. En casi todos los estados el movimiento ha venido creando centros de formación propios en los que se imparten cursos de agroecología, salud, pedagogía, análisis de la realidad, formación política, etc. Estos centros sirven también de infraestructura al proyecto y en ellos se desarrollan los talleres y cursos programados

Para el seguimiento del proyecto hemos contado también con la colaboración de la delegación en Brasil de Mundubat, ONG vasca con la que mantenemos una estrecha colaboración. La difusión del proyecto en Aragón, la hacemos con la participación de la UAGA, que está asociada con el MST a través de la Vía Campesina. Cada año programamos al menos seis charlas en diferentes localidades de las tres provincias aragonesas para dar a conocer tanto el proyecto que estamos realizando como las luchas, reivindicaciones y planteamientos del MST. También hemos realizado exposiciones y preparado diferentes materiales de difusión y hemos facilitado los viajes de varios militantes de MST que nos han traído de primera mano sus experiencias.





El Movimiento ha creado centros de formación propios donde se imparten cursos de agroecología, salud, pedagogía, etc.





El Barrio Solidaridad: el derecho a una vivienda digna



En España, la vivienda empieza a estar asociada a una de nuestras peores pesadillas: la hipoteca. Alcanzar el suficiente nivel de vida como para poder cumplir con los compromisos financieros que implica la compra de una vivienda, máxime en tiempos de crisis como los actuales, puede que esté empezando a generar algún tipo de síndrome de ansiedad que posiblemente forme parte de alguna futura tesis doctoral. Si bien esta situación en España podría convertirse en un problema de salud pública en el futuro, hoy todavía es un problema fundamentalmente económico. Sin embargo, las condiciones de la vivienda

han sido reconocidas como una de las principales determinantes de la salud humana en el mundo. En particular, las condiciones de la vivienda en los asentamientos precarios de América Latina son especialmente preocupantes, lo que podría estar afectando a la salud de millones de personas. Más del 25% de la carga global de infecciones respiratorias agudas, diarrea, infecciones intestinales, Tracoma, Chagas, Dengue, Malaria y malnutrición son atribuibles a las condiciones de la vivienda. Aproximadamente, 127 millones de personas viven en asentamientos precarios urbanos en América Latina. Sólo en Nicaragua, el 50% de



Sindicalismo y Solidaridad

A pesar de los intentos de expulsión, se fue formando un núcleo poblacional que ahora es de 15.000 vecinos agrupados en torno a 220 familias que no pudieron ser desalojadas

la población urbana viven en este tipo de asentamientos.

La precariedad de la vivienda afecta a las poblaciones más pobres y a los más vulnerables, como los niños menores de cinco años, las personas con enfermedades crónicas, los discapacitados y los ancianos, que pasan la mayor parte del tiempo en la vivienda.

Las relaciones con-

cretas entre calidad de la vivienda y la salud aun no están completamente comprendidas y cuantificadas, pero sólo por señalar algunas, destacamos las siguientes: la mortalidad infantil varía inversamente con las coberturas de saneamiento; los casos de enfermedades transmitidas por vectores (mosquitos, chinches, etc.) como la enfermedad de Chagas, el dengue y el paludismo están asociados con materiales de construcción precarios, hábitos de comportamiento no saludables y entorno no adecuado; el hacinamiento y la mala ventilación facilita la transmisión de la tuberculosis.

La vivienda saludable es un problema de carácter estructural que requiere de intervenciones con ese enfoque. A nuestro juicio, la vivienda saludable ejerce – en forma directa o indirecta – una influencia positiva en el cumplimiento de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En ese contexto, el proyecto de construcción del barrio de Solidaridad de la ciudad de Granada, nace como consecuencia de la ocupación de un grupo de familias, la mayor parte de ellas monoparentales, que, huyendo de la extrema pobreza del medio rural, deciden instalarse en la periferia de esta ciudad de Nicaragua. A pesar de los numerosos intentos de expulsión por parte de las autoridades locales, se fue conformando un núcleo poblacional que ahora es de más de 1.500 habitantes, agrupados en torno a 220 familias, que no pudieron ser desalojados gracias a su tenaz resistencia.

La Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE), organización con la que venimos cooperando desde 1997, propuso a Paz y Solidaridad la elaboración de un proyecto para llevar a cabo una reforma integral del barrio. La situación del mismo, a orillas del Lago Nicaragua, era extremadamente precaria, con alta incidencia de enfermedades relacionadas con las ma-





las condiciones higiénicas del mismo, como la malaria, el dengue o las diarreas, muy corrientes sobre todo entre la población infantil, cuya tasa de mortalidad estaba por encima de la media del país.

El proyecto de construcción no sólo se ha centrado en las viviendas sino también en las obras de urbanización, como son desagües, aceras, pavimentación de la calzada, etc. La población ha participado directamente a través tanto de la aportación de mano de obra como de diversos materiales constructivos, condición indispensable para poder optar a una de estas viviendas

El Proyecto finalizará este año 2009, y mediante la corresponsabilidad de las beneficiarias, organizadas en torno a AMNLAE, se mejorará las condiciones higiénicas y sanitarias de las familias del Barrio Solidaridad, y por ende, la

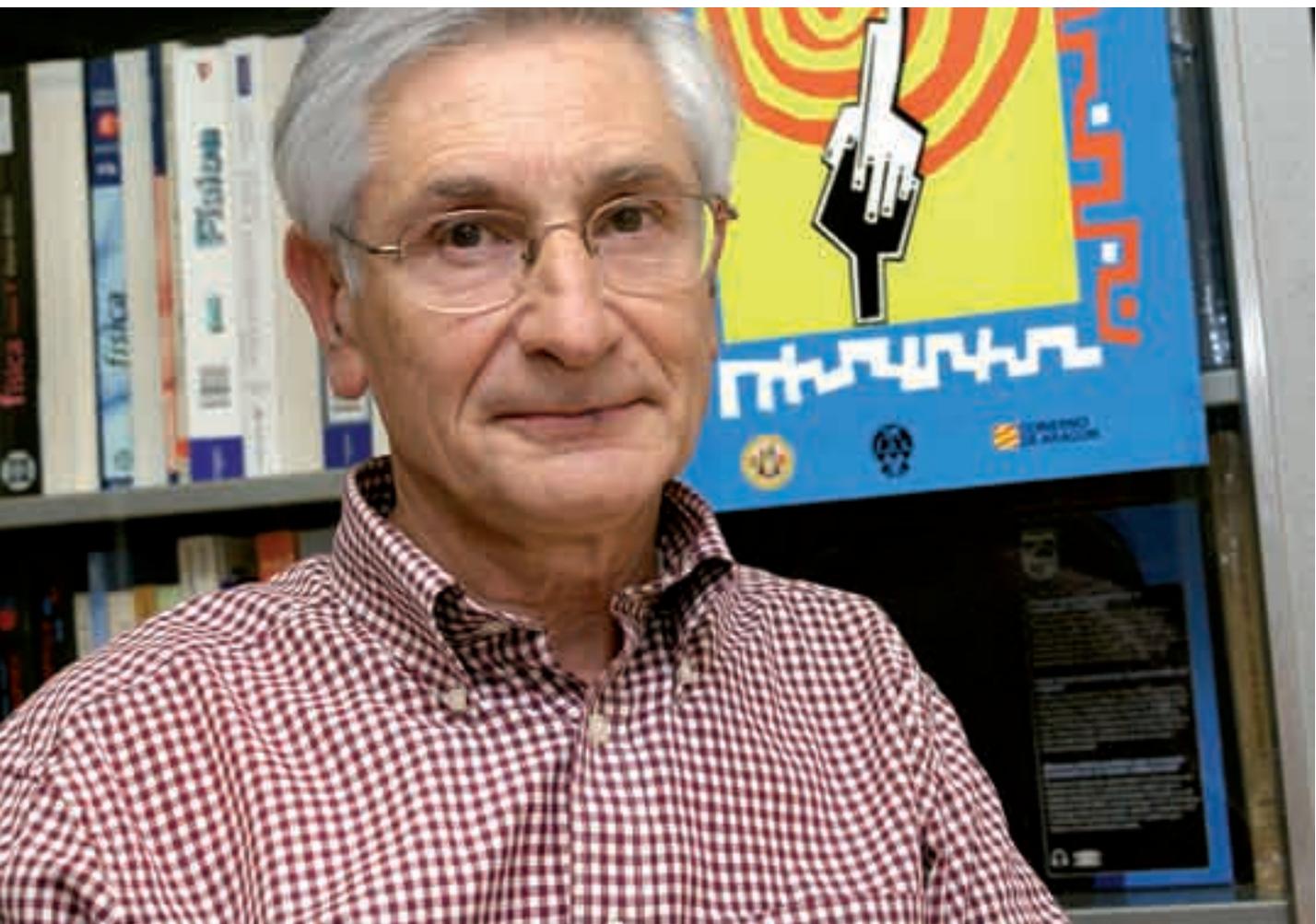
calidad de vida de los vecinos y vecinas de dicho barrio, dando de este modo cumplimiento a lo enunciado por la Organización Mundial de la Salud, que sostiene que la vivienda influye favorablemente en los procesos restauradores de la salud e incentiva la actividad creadora y el aprendizaje pudiendo, en este sentido, devenir en promotora de la salud de la población. Una vivienda adecuada ayuda al desarrollo social y psicológico de las personas, pero, además, contribuye a dinamizar las economías de la zona ya de por sí muy castigadas por los altos niveles de paro que afectan a Nicaragua.

Este proyecto ha sido posible gracias al Gobierno de Aragón, los Ayuntamientos de Zaragoza, Utebo, Teruel, la Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de la ciudad de Granada de Nicaragua.

Hablamos con... Ricardo Álvarez



“El objetivo es que un día la cátedra no tenga sentido”



Como profesor de Física en la Universidad de Zaragoza, Ricardo Álvarez recogió el reto de crear una cátedra de Cooperación al Desarrollo con la prevención propia de quien no está en su ámbito natural. Sin embargo, como activista en movimientos sociales desde el asociacionismo vecinal de Torrero, la Federación de Barrios de Zaragoza o Acción Solidaria Aragonesa, este zaragozano de 64 años decidió afrontar el envite con la ilusión de unas firmes convicciones. En su opinión, desde el primer mundo esta labor debe abandonar el paternalismo asistencial y apostar de una vez por un diálogo de tú a tú que enriquezca a ambas partes.



¿Cómo surge la idea de crear una Cátedra de Cooperación al Desarrollo y a qué objetivos responde?

El proyecto arrancó en 1999 cuando la Federación Aragonesa de Solidaridad me pregunta cómo hacer un curso con un poco más de amplitud en la Universidad que no dependiese de ningún departamento. Los mandé al rectorado y a las dos semanas me llamaron para ver si yo me hacía cargo de este curso. En octubre del 2000 empezó el curso y al año siguiente conseguimos que el Gobierno de Aragón ampliara el presupuesto al doble para cubrir una beca de investigación. Desde el principio planteamos que se creara alguna estructura universitaria con más futuro, ya que aquí no había ciencias sociales, políticas o algún departamento que pudiese englobar esta dirección. En 2007 se recupera el proyecto y la vicerrectora, Natividad Fernández, acepta el reto y en 2008 se firma el convenio.

Una de las primeras actividades de la Cátedra fue la organización de una charla a cargo de Manfred Max Neef, economista premiado con el 'nobel alternativo' por sus teorías heterodoxas y críticas con el pensamiento dominante. ¿Son necesarios más espacios en la Universidad para divulgar concepciones distintas?

La cátedra involucra a personas integradas en organizaciones no gubernamentales -yo mismo formo parte de una de ellas, Acción Solidaria Aragonesa- y nos ponemos en contacto con personas del mundo universitario que mantengan una línea crítica con las líneas al uso. Quizá aquí en Zaragoza no hay mucha tradición en esta línea, pero en España vamos ya por el cuarto congreso en cooperación al desarrollo. En el mundo de los economistas tampoco está muy extendido el número de personas que tengan visiones alternativas a las teorías clásicas. De todos modos, en Aragón tenemos gente como Pedro García, Chaime Marcuello y su hermana Carmen Marcuello o Enrique Demolins...

¿Qué actividades estáis programando para el futuro más inmediato?

Lo más inmediato es el curso básico de Zaragoza, un curso con seis créditos, como una asignatura convencional. Está abierto a personas no universitarias, pero los alumnos que quieren reconocimiento académico tienen que pasar por una evaluación y un trabajo. Además, vamos a hacer un curso de ayuda humanitaria y de emergencia y otro curso de iniciación a la práctica de la cooperación.

Quizá no sea políticamente correcto, pero se puede afirmar que ya hay un nicho de empleos dentro del mundo de la cooperación...

A veces se critica que es "vivir a costa de los pobres", pero es una realidad. Se está un poco

profesionalizando ese concepto de la ayuda. Hay una declaración de París que propugna eso..., no es que sea mi visión personal, sino más que hay que ser eficaz. Los que estamos en la Cátedra lo que propugaríamos sería una eficacia de la política, no de la ayuda.

Porque evidentemente con ayuda no vamos a resolver el problema. Además, curiosamente se llama cooperación y no es cooperación, se trata lisa y llanamente de ayuda, y así se habla, de ayuda oficial y ayuda no oficial al desarrollo.

«Evidentemente, con ayuda no se va a resolver el problema.

Además, se llama cooperación y no es cooperación, es lisa y llanamente ayuda»

¿Que haría falta para que la cooperación deje de tener ese concepto instrumental por parte de los estados, casi asistencial, y permita el desarrollo de las sociedades?

Lo que hace falta es voluntad política, y que los agentes económicos no tengan tanto poder como los agentes políticos. Hay que cambiar las leyes económicas mundiales. Es que son auténticas leyes de embudo: esto para tí y esto para mí.

Vivimos en medio de una crisis económica que ha impactado muy especialmente en el "mundo desarrollado". Paradójicamente, esto puede afectar a los países en desarrollo a través de recortes en los fondos de ayuda al desarrollo...

No es que sea avanzar demasiado, pero ya está habiendo recortes en los diferentes aspectos. A ver si a nosotros nos llega estrictamente, pero ya nos lo han anunciado. Sí que somos conscientes de que en algunas áreas, como migraciones, sí que ha habido un recorte desde el gobierno central a lo que se destina a las autonomías. Yo puedo suponer que el conjunto de los fondos van a tener un recorte, pero confío en que la parte que se asigna a sensibilización y educación no se vea especialmente afectada. Nuestro objetivo sigue siendo ir creciendo cada año.

El plan para la cooperación aragonesa establece una serie de objetivos prioritarios para actuar en algunos lugares: Latinoamérica, África subsahariana, Magreb... ¿Estamos ante una visión de la ayuda complementaria de la política exterior del país?

A lo mejor tampoco hay que verlo estrictamente así, con tal de que se haga bien. Es relativamente lógico que la facilidad de interrelación con el mundo latino esté ahí. Hasta podríamos hablar de una responsabilidad histórica... En el África subsahariana, se trata de un objetivo de muchos organismos porque es donde se concentra el mayor nivel de pobreza actualmente, excluido el



extremo oriente, pero a nosotros nos queda muy ajeno cultural y geográficamente. También tenemos una organización pequeña en India, pero muchas veces esa acción sí que surge de relaciones personales, hasta de una persona, que genera un grupo de apoyo. En Zaragoza lo estamos viendo con una persona que se fue a vivir al Chad y tenemos mucha interacción desde ASA.

Sin embargo, el Tribunal Permanente de los Pueblos ha denunciado la vinculación de los Fondos de Ayuda al Desarrollo por parte del Gobierno Español como una forma de "colonialismo" empresarial en favor de la actividad de Unión Fenosa en Nicaragua.

Cada vez se está controlando más. Antes los famosos fondos FAD eran la irrisión: la promoción

de la empresa nacional y punto. Pero la desazón es esa, que sólo se hace eso: depurar, mejorar; no se coge el toro por los cuernos. Sigue existiendo la Política Agraria Común, que es un dumping lisa y llanamente, o restricciones comerciales: mucha ayuda pero que no vengan los tomates de Marruecos, es lo único que nos preocupa. También, se trata de transmitir un concepto de desarrollo enraizado en su propia cultura: un respeto a las tradiciones, al concepto de desarrollo, que no es sólo económico. El crecimiento económico no es el progreso de las sociedades, es sólo una faceta que a veces puede ser hasta perjudicial.

La internacionalización de nuestras empresas ha traído, después de muchos años, una gran responsabilidad en el ámbito internacional. ¿Cree que hay una concienciación suficiente del impacto de nuestra actividad en otros lugares?

Yo creo que en España no nos estamos enterando de los desmanes de estas empresas -Telefónica, Repsol, Endesa o Feonsa. Ahora, en esos países también están surgiendo regímenes que están poniendo los puntos sobre las íes o les están parando los pies. Lo malo es que aquí se está percibiendo como una agresión, como en el caso de Venezuela, que se ve como el gran ogro que está esquilmando a las empresas españolas que tanto están favoreciendo al crecimiento económico del país. Las empresas están haciendo su labor em-



presarial, y colaboran en cierta medida, aunque a veces a base de unos costes medioambientales, sociales, etc., inadmisibles. Y de eso es muy difícil hablar, la prensa se resiste a investigar sobre ello y hay que acudir a redes de información alternativa. España da la impresión de que siempre se ha lavado las manos y cuando va allí un ministro de Exteriores a lo que va es a defender los intereses empresariales.

¿Qué balance hace de la cooperación al desarrollo que se hace desde Aragón?

Creo que hay una muy buena voluntad por parte de las personas que trabajan desde el Gobierno de Aragón y desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Entiendo que están dando la batalla por ampliar y dar más salida. Yo sí que tengo la impresión de que nos estamos concienciando más. Antes decía que hace falta voluntad política, pero la voluntad política nace de la conciencia social. Tenemos que transmitir un concepto de ciudadanía global, que no existan tantas desigualdades entre vivir en una y otra parte del planeta.

El tema de la pobreza parece que está mal visto porque anima a recuperar conceptos tabú como el concepto de clase o los límites del crecimiento.

Hay una línea que pretende poner de manifiesto que el mundo sería insostenible si todos llegásemos al mismo nivel: el decrecimiento.

Posiblemente sea «Mucha ayuda, pero que no vengan los tomates de Marruecos, es lo único que nos preocupa»

Posiblemente sea verdad, pero tengo la impresión de que eso no va a cambiar y que, por su puesto, voluntariamente nadie vamos a decrecer. Lo que necesitamos es eso, ir a un concepto de política económica global y que los impuestos sean globales. Esto es, aplicar medidas tan simples como las tasas a movimientos financieros e ir progresando.

Son compatibles objetivos como el 0,7% con las políticas del Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio?

Yo tengo cierta esperanza en que organizaciones como el Fondo Monetario Internacional vayan cambiando. Me da la impresión de que poco a poco se van a poder refundar esas instituciones, ir haciendo verdadero su papel: contribuir a la estabilidad económica mundial y al crecimiento económico. La Organización Mundial del Comercio está más verde. Últimamente lo que está ocurriendo es que, por lo menos, no llega a ningún resultado y está paralizada. Yo suelo decir que la ambición de la Cátedra es desaparecer, como en otras organizaciones; que nuestra misión ya no tenga sentido.

“El agua, derecho humano y raíz de conflictos”



La Fundación Seminario de Investigación para la Paz, como forma de contribuir al objetivo de la Exposición Internacional Zaragoza 2008 sobre agua y desarrollo sostenible, editó este trabajo, fruto de una investigación colectiva.

En él, y desde la perspectiva del análisis de conflictos, se abordaron las raíces de la violencia directa y estructural existentes en el mundo en relación con el agua, las tensiones y conflictos internacionales que crecen en torno a distintos sistemas acuáticos, buscando respuestas para transitar de este potencial conflictivo hacia prácticas de cooperación.

En diferentes partes del libro se alude a la carga de valores y significaciones del agua, un bien que siendo clave para la vida evoca valores más allá de lo material. Como en toda la serie de trabajos de investigación colectiva publicados por la Fundación SIP, en este volumen se incorporan las ponencias tal como fueron expuestas, así como una amplia síntesis de los argumentos intercambiados en los debates a que aquéllas dieron lugar.

Codesarrollo, nuevo enfoque de las migraciones

El Centro de Investigación y Cooperación para el Desarrollo (CIDEAL) ha editado recientemente el libro “El codesarrollo y su gestión: haciendo camino al andar”. El libro reúne las aportaciones de significados especialistas en codesarrollo, un concepto basado en la idea de que los migrantes, por diferentes vías, pueden contribuir al desarrollo de las sociedades, tanto de origen como de destino. Esto adquiere especial relevancia en un momento como el actual, marcado por la crisis económica internacional, el cambio climático, la crisis alimentaria y la incidencia de estos factores en la evolución de los flujos migratorios. En este libro se ofrece una visión actualizada de sus principales actores e instrumentos y una aproximación a la gestión de intervenciones en este ámbito.

Guía diferente sobre la globalización

Anversos y Reversos es una iniciativa de la Fundación Paz y Solidaridad de Navarra, la apuesta por el desarrollo de CCOO, que pretende aportar un enfoque diferente de mirar la realidad, una nueva herramienta para desentrañar las paradojas y complejidades de este mundo convulso y confuso. Existen muchos malos entendidos en torno al término globalización. Esta Guía pretende contestar a algunas preguntas claves. Por ejemplo: ¿Se puede hablar de globalización sin más? Globalización..., ¿pero de qué y de quién? ¿Se puede llamar antiglobalización a los movimientos sociales que tienen una forma de conectarse y organizarse precisamente globalizada? ¿En qué y cómo me afecta la globalización? Y si nos afecta tanto, ¿lo hace a todos de la misma forma? ¿Qué tienen que ver el trabajo, el consumo, el mercado, los Estados, las identidades en esta maraña de conceptos?

Convenio sindical en el África Occidental y Mediterráneo



Este plan de cooperación, cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), durante los próximos cuatro años, parte de la consideración de las organizaciones sindicales nacionales y regionales como agentes de desarrollo en sus respectivas áreas. La Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga, como ONG especializada en la cooperación sindical al desarrollo, fortalecerá así el sindicalismo en el África Occidental y Mediterráneo, en un contexto social, político y económico de agresión constante a los derechos laborales, económicos y sociales.

En el convenio es esencial el enfoque de género, de manera que todas las actividades tendrán en cuenta ese componente desde su planificación hasta su desarrollo. Además se prevén actividades específicamente destinadas por un lado a fortalecer la presencia de las mujeres en el sindicato y, por otro, a mejorar las condiciones de las mujeres trabajadoras. Las zonas de intervención del Convenio son Magreb, África Occidental, Oriente Medio y España, estableciéndose objetivos diferenciados para cada zona.



PAZ Y SOLIDARIDAD Y CCOO ARAGÓN

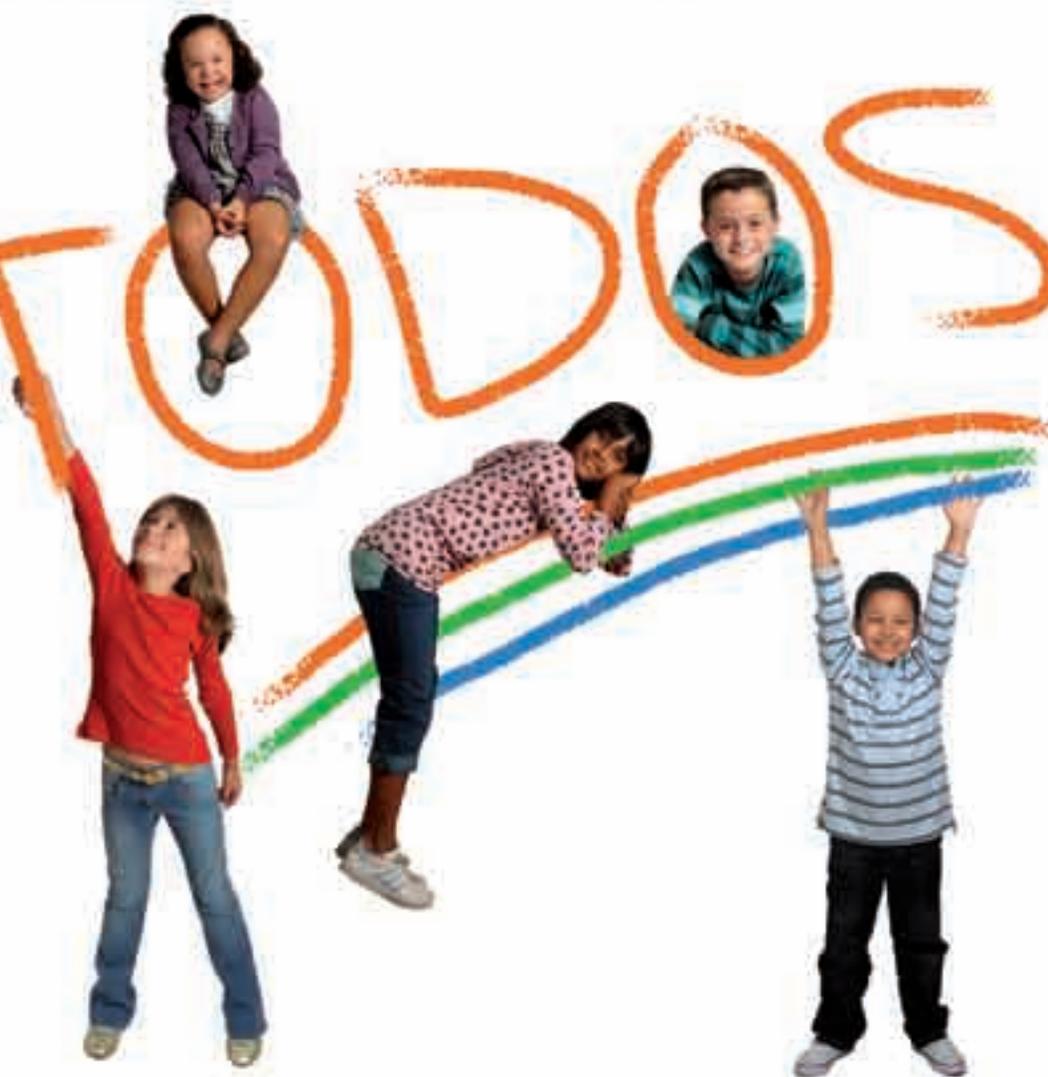
TRABAJAMOS POR EL BIENESTAR EN TODO EL MUNDO

PROYECTOS DE PAZ Y SOLIDARIDAD ARAGÓN 2009

TIPO DE PROYECTO	IMPORTE	% sobre 2009
Proyectos de Vivienda y Saneamiento: Barrio Solidaridad. Nicaragua	33.495,81 €	5,29%
Proyectos de Agua y Saneamiento: Agua y Saneamiento Integral para Comunidades Indígenas de Alta Verapaz. Guatemala.	69.073,85 €	10,91%
Proyectos de Desarrollo Económico, Social y Organizativo: <ul style="list-style-type: none">✓ Proyecto de Desarrollo Comunitario de poblaciones indígenas de la cuenca sur del lago Atitlán, Sololá, Guatemala. Segunda Fase 2009✓ Proyecto para el fortalecimiento económico y social Finca La Florida. Guatemala✓ Derechos Humanos y Sindicales en Guatemala: la violación que no cesa.	425.892,16 €	67,27%
Proyectos de Sensibilización: Revista Solidaridad- Global	104.569,16 €	16,51%

Aragón, una tierra para

TODOS



“ El futuro no está sólo en nuestras manos.
Está en las de ellos, en las de todos.
Y la integración nos permite avanzar en la
construcción de una tierra mejor, donde poder crecer y convivir ”